

CASIMIRO G.-ABADILLO

Vuelven las fronteras



DURANTE los últimos tiempos se ha producido un giro significativo en la política de inmigración en Europa.

Un hecho lo evidencia: Sarkozy recurrió a endurecer su mensaje contra los inmigrantes ilegales para tratar de ganar el voto de la derecha, que había buscado refugio en el partido de Marine Le Pen, y así recuperar el terreno perdido en las

encuestas frente a Hollande. Aunque, finalmente el líder de la UMP perdió, lo cierto es que recorrió distancias: el candidato socialista le sacó menos de cuatro puntos.

Ese viraje tiene su origen en la crisis económica y en el hecho de que la mayoría de los ciudadanos culpa a la inmigración de la pérdida de empleo de los nacionales. Una encuesta realizada por IFOP en el verano de 2011 puso de manifiesto que el 75 por ciento de los franceses creía que la apertura de fronteras había sido perjudicial para el empleo en Francia.

Ese sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes también se produce en España. Según una encuesta sobre inmigración realizada por *The German Marshall*

“papeles para todos”, eslogan esgrimido en su día por el PSOE, hemos pasado a las restricciones y al rechazo.

La recesión económica va a trastocar el modelo de Europa diseñado durante los años de crecimiento y despilfarro. Cada vez son más los que creen que vivimos en los estertores del euro. Por tanto, no es extraño que los grandes países, como Francia y Alemania, se replanteen incluso uno de los pilares de la Unión Europea: la desaparición de las fronteras nacionales.

Durante esos felices años del *boom*, Europa ni siquiera fue capaz de armonizar su política migratoria. Por increíble que parezca, un país limítrofe con África como España puso en marcha una legislación tan permisiva que provocó el “efecto llamada” a cientos de miles de inmigrantes que querían venir al continente con el legítimo deseo de mejorar sus condiciones de vida.

Los excesos han llevado a la situación actual, en la que una mayoría de ciudadanos en toda Europa considera directamente culpable de la crisis de empleo al elevado número de inmigrantes.

Europa no debería caer en el mismo error, pero a la inversa. El populismo es un recurso fácil para los políticos. Hacerse eco de la opinión mayoritaria para utilizarla en beneficio propio solo habla en detrimento de los que lo hacen. La construcción de la Unión Europea no es posible si se restablecen las fronteras internas, como tampoco es posible sin una moneda única. Sería dar un paso atrás tal vez irreversible.

La política migratoria debe pactarse entre los países miembros de la UE. Deben establecerse criterios comu-

nes que se apliquen por igual, sin excepciones, en todos los países.

En función de la situación económica, la Comisión Europea debería establecer cupos de inmigración. La lucha contra las mafias que transportan como a animales a los inmigrantes para colocarles de forma ilegal en territorio europeo debe ser implacable. Pero, cuidado. Una cosa es establecer cupos migratorios y otra alimentar la xenofobia o el racismo.

Una Europa teñida de recelo hacia los inmigrantes camina en sentido contrario de ese ideal que concitó el respaldo mayoritario de sus ciudadanos hace no mucho tiempo.

El recurso fácil al odio al extranjero es el mejor caldo de cultivo de las ideologías y los partidos totalitarios (lo hemos visto en Holanda, en Francia y en Grecia). Se empieza por rechazar a los inmigrantes musulmanes y se acaba por discriminar a todo lo que no lleve garantía de pureza de la raza.

Los bandazos no son buenos en política, como tampoco en las actitudes. Se legisló con demagogia cuando se aceptó la entrada masiva de extranjeros y ahora se mira con simpatía a los que quieren echarlos a todos. Europa debe identificarse con una idea de democracia y de acogida. Lo contrario nos puede llevar de nuevo a los trágicos años 30.

Casimiro García-Abadillo es periodista.

De la Europa sin fronteras, de los ‘papeles para todos’, hemos pasado a las restricciones y al rechazo

Fund of the United States, en colaboración con el BBVA, hecha pública a mediados del pasado mes de diciembre, el 55 por ciento de los españoles cree que los inmigrantes son un problema para los servicios sociales. Ese mismo porcentaje les hace culpables de las bajadas de salarios. Una clara mayoría, el 65 por ciento, critica la política migratoria llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero.

No sabemos lo que hará ahora el nuevo presidente francés, pero Sarkozy y Merkel impulsaron a finales de abril una iniciativa para “suspender temporalmente”, durante el periodo de crisis, el Tratado de Schengen.

El gobierno español aprobó también recientemente una norma que dejará sin cobertura sanitaria (a excepción de las urgencias y enfermedades como el SIDA) a los inmigrantes en situación irregular. Eslovenia, Chipre, Reino Unido y Polonia tienen un esquema sanitario similar al que estará vigente en España a partir del mes de septiembre. De la Europa sin fronteras, de los